



# Asamblea General

Distr. general  
14 de octubre de 2011  
Español  
Original: inglés

## Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

### 45º período de sesiones

Nueva York, 18 de junio a 6 de julio de 2012

[o Viena, 9 a 27 de julio de 2012]

## Informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) sobre la labor realizada en su 45º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de octubre de 2011)

### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción . . . . .	1-3	2
II. Organización del período de sesiones . . . . .	4-10	2
III. Deliberaciones y decisiones . . . . .	11-13	3
IV. Problemática jurídica de los documentos electrónicos transferibles . . . . .	14-88	4
A. Tema central: los documentos electrónicos transferibles . . . . .	14-22	4
B. Problemática jurídica de los documentos electrónicos transferibles . . . . .	23-28	5
C. Equivalencia funcional y neutralidad respecto de los medios tecnológicos . . . . .	29	6
D. Equivalencia funcional de la “singularidad” . . . . .	30	6
E. Equivalencia funcional de la “posesión”: el concepto de “control” . . . . .	31-37	7
F. El enfoque basado en un registro . . . . .	38-40	8
G. Posible metodología para la labor futura del Grupo de Trabajo . . . . .	41-88	8
V. Labor de otras organizaciones internacionales sobre cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles . . . . .	89-91	15
VI. Otros asuntos . . . . .	92-95	16
A. Asistencia y cooperación técnicas . . . . .	92	16
B. Futuras reuniones . . . . .	93-95	16



## I. Introducción

1. En su 40º período de sesiones, celebrado en 2007, la Comisión pidió a la Secretaría que siguiera de cerca la evolución legislativa en materia de comercio electrónico, con miras a efectuar, en su momento, sugerencias oportunas sobre la labor futura<sup>1</sup>. En su 42º período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara un estudio sobre los documentos electrónicos transferibles basándose en las propuestas presentadas en ese período de sesiones (documentos A/CN.9/681 y Add.1, y A/CN.9/682)<sup>2</sup>.

2. En cumplimiento de esas peticiones, se presentó a la Comisión en su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, un documento sobre la labor actual y la posible labor futura en materia de comercio electrónico (A/CN.9/692). En ese período de sesiones la Comisión pidió a la Secretaría que organizara un coloquio sobre los temas correspondientes, a saber, los documentos electrónicos transferibles, la gestión de datos de identificación personal y el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles, y que le informara sobre las deliberaciones mantenidas en ese coloquio<sup>3</sup>.

3. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión tuvo a su disposición una nota de la Secretaría (A/CN.9/728 y A/CN.9/728/Add.1) en la que se resumían las deliberaciones mantenidas en el coloquio sobre la posible labor futura en materia de comercio electrónico (Nueva York, 14 a 16 de febrero de 2011)<sup>4</sup>. En ese período de sesiones, la Comisión convino en volver a reunir al Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) para que se ocupara del tema de los documentos electrónicos transferibles<sup>5</sup>, y en que las deliberaciones podían incluir ciertos aspectos de otros temas tratados en los documentos A/CN.9/728 y A/CN.9/728/Add.1<sup>6</sup>.

## II. Organización del período de sesiones

4. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 45º período de sesiones en Viena del 10 al 14 de octubre de 2011. Asistieron a él representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Australia, Austria, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Italia, Japón, Kenya, México, Nigeria, Paraguay, Polonia, República Checa, República de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

---

<sup>1</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17, parte I), párr. 195.*

<sup>2</sup> *Ibid.*, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 343.

<sup>3</sup> *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 250.

<sup>4</sup> Consúltese la información relativa a este coloquio, disponible en la fecha del presente informe, en <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html>.

<sup>5</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 238.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, párr. 239.

5. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Indonesia, Panamá, Perú, República Dominicana y Rumania.
6. Asistieron también al período de sesiones observadores de Palestina y la Unión Europea.
7. Asistieron asimismo al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:
  - a) *Organizaciones intergubernamentales*: Organización Mundial de Aduanas (OMA);
  - b) *Organizaciones internacionales no gubernamentales*: Conseil des Notariats de l'Union Européene (CUNE), European Multi-channel and Online Trade Association (EMOTA), Instituto de Derecho y Tecnología (Universidad Masaryk), International Technology Law Association (ITECHLAW) y New York State Bar Association (NYSBA).
8. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:
 

*Presidente:* Sr. D. Agustín MADRID PARRA (España)

*Relatora:* Sra. Surangkana WAYUPARB (Tailandia)
9. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos:
  - a) Programa provisional anotado (A/CN.9/WG.IV/WP.114);
  - b) Una nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles (A/CN.9/WG.IV/WP.115); y
  - c) Aspectos jurídicos del comercio electrónico – Propuesta del Gobierno de España (A/CN.9/WG.IV/WP.116).
10. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:
  1. Apertura del período de sesiones.
  2. Elección de la Mesa.
  3. Aprobación del programa.
  4. Cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles.
  5. Labor de otras organizaciones internacionales sobre cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles.
  6. Otros asuntos.
  7. Aprobación del informe.

### III. Deliberaciones y decisiones

11. Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo, la Secretaria General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de las Naciones Unidas hizo una declaración. Refiriéndose a los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico,

señaló que la CNUDMI había hecho importantes contribuciones a la armonización del derecho mercantil internacional. También tomó nota de los notables problemas que habría de afrontar el Grupo de Trabajo, habida cuenta de la complejidad no solamente jurídica sino también tecnológica del tema.

12. En nombre del Secretario General, la Asesora Jurídica puso de relieve que la labor realizada por la CNUDMI, tanto a nivel de la Comisión como de sus grupos de trabajo, gozaba de un gran prestigio en la comunidad comercial internacional, en particular en el momento actual de crisis financiera y de contracción del comercio internacional. Tras señalar que a menudo los pobres eran los más vulnerables, subrayó que facilitando el acceso a nuevas tecnologías mediante la adopción de legislación pertinente se podía fomentar el desarrollo económico. Concluyó destacando el papel que desempeñaba la CNUDMI al formular normas jurídicas internacionales que podían promover la libre circulación de las mercancías y la libertad de comercio, y observando que la existencia de esas normas era fundamental para las actividades de reforma de la legislación mercantil que llevaban a cabo los países en desarrollo y los países con economías en transición.

13. El Grupo de Trabajo inició sus deliberaciones sobre las cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles basándose en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.115. Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo se recogen a continuación.

#### **IV. Problemática jurídica de los documentos electrónicos transferibles**

##### **A. Tema central: los documentos electrónicos transferibles**

14. El Grupo de Trabajo empezó por entablar un debate general sobre los documentos electrónicos transferibles. Se reconoció que en la actualidad no había ningún marco jurídico internacionalmente aceptado, generalizado y armonizado que regulara las diversas cuestiones que planteaba la utilización de documentos electrónicos transferibles, lo cual no incitaba a recurrir a ellos.

15. En ese contexto se sugirió que, en primer lugar, el Grupo de Trabajo determinara los problemas que planteaba el uso de los documentos transferibles en los diversos sectores comerciales y ordenamientos jurídicos. Se observó también que en el debate no habría que analizar únicamente la posible utilización de documentos electrónicos transferibles en el futuro sino también las prácticas existentes.

16. Se sugirió asimismo que el Grupo de Trabajo se centrara en la problemática jurídica y en los obstáculos que planteaba el empleo de los documentos electrónicos transferibles, como la creación, la emisión, la transferencia y el control de tales documentos, así como en los diversos métodos para identificar al tenedor, inclusive los registros.

17. Tras deliberar, se convino en general en que el Grupo de Trabajo procediera a determinar qué problemas jurídicos obstaculizaban la utilización de los documentos electrónicos transferibles.

18. Se sugirió que el Grupo de Trabajo estudiara el concepto de documento electrónico transferible y analizara la forma en que se abordaban los problemas pertinentes en los distintos ordenamientos jurídicos.

19. Se formuló la pregunta de si los documentos que daban al tenedor el derecho a cobrar una suma de dinero (títulos transferibles) deberían abordarse por separado, es decir, distinguiéndolos de los que daban al tenedor el derecho a que se le entregaran mercancías (documentos de titularidad). A este respecto se sugirió que el Grupo de Trabajo se centrara en el examen de los documentos de titularidad negociables.

20. Se sugirió también que el Grupo de Trabajo aclarara las diferencias entre los títulos transferibles y los documentos de titularidad, así como las diferencias entre documentos negociables y no negociables. En este contexto, se señaló que no había necesidad de analizar los títulos transferibles que no fueran negociables, ya que las cuestiones jurídicas que planteaban esos títulos ya se habían abordado en los textos existentes de la CNUDMI en materia de comercio electrónico.

21. Por otra parte, se propuso adoptar un enfoque global que abarcara también los valores que aún no estuvieran totalmente desmaterializados. A este respecto se recomendó que se examinaran los instrumentos existentes, como el Convenio del UNIDROIT sobre el régimen sustantivo aplicable en materia de valores depositados en poder de un intermediario (2009), así como la labor llevada a cabo en otros foros, inclusive la del Grupo de Trabajo VI relativa a la inscripción registral de garantías reales sobre bienes muebles.

22. Tras deliberar, se convino en general en que el Grupo de Trabajo adoptara un enfoque amplio y tomara en consideración todos los posibles tipos de documentos en formato electrónico, dejando abierta la posibilidad de hacer distinciones en el tratamiento de esos documentos electrónicos, cuando fuera conveniente.

## **B. Problemática jurídica de los documentos electrónicos transferibles**

23. El Grupo de Trabajo observó que subsistían importantes problemas, concretamente en caso de que en la transferencia del documento electrónico interviniera un tercero. En ese contexto, se puso de relieve que habría que hacer una distinción entre la transferibilidad y la negociabilidad, haciendo especial hincapié en esa última ya que, abarcaba, entre otras cosas, la protección de terceros. Se convino en que el Grupo de Trabajo deliberara a fondo sobre los conceptos de transferibilidad y negociabilidad y aclarara la diferencia que había entre ellos.

24. Se señaló también que, al menos en algunos ordenamientos jurídicos, y tal vez a reserva de otras condiciones como la buena fe del beneficiario de la transferencia, la validez de la titularidad transferida con un título negociable no podría verse afectada por una reclamación relativa a las operaciones pertinentes. Se mencionó que la negociabilidad del título dependía tanto del derecho aplicable como de las condiciones contractuales del título.

25. Se señaló que, si bien los títulos negociables sobre papel se basaban en la presunción de que existía un único documento original y auténtico, la verdadera finalidad de ese requisito era asegurar que solamente una parte tuviera derecho a exigir el cumplimiento de la obligación consignada en el título negociable. Se señaló además que ese objetivo podría lograrse, en las comunicaciones electrónicas,

sin seguir necesariamente el enfoque tradicional, habida cuenta de que los documentos electrónicos no existían únicamente en un ejemplar, dado que la propia transmisión electrónica requería la duplicación de esos documentos.

26. Se opinó que, en las comunicaciones electrónicas, la singularidad podía lograrse empleando adecuadamente el concepto de derecho de control del documento electrónico negociable, lo cual dependería, a su vez, de la posibilidad de identificar y de autenticar de manera fiable a la parte que ejerciera el control. Se agregó que ese proceso fiable de identificación y autenticación requería necesariamente que se recurriera a sistemas de gestión de identidad. A este respecto se indicó también que podría ser apropiado que hubiera distintos niveles de identificación y de autenticación, habida cuenta de las distintas funciones que desempeñaban las partes que intervenían en la transferencia de los documentos electrónicos negociables.

27. Se consideró que si se analizaban las anteriores tentativas de establecer sistemas para regular los documentos negociables, el Grupo de Trabajo comprendería mejor las razones por las que no se había logrado una adopción internacional amplia. Entre los factores pertinentes que se mencionaron figuraban los obstáculos dimanantes de la aceptación limitada de los principios jurídicos en que se basaban los ordenamientos jurídicos extranjeros y la falta de disposiciones adecuadas en el derecho aplicable.

28. Se estimó que, mientras que los textos de la CNUDMI y otros textos legislativos se inspiraban tradicionalmente en los principios de la no discriminación, la neutralidad respecto de los medios tecnológicos y la equivalencia funcional, las necesidades peculiares que planteaban los documentos electrónicos negociables tal vez requirieran un debate sobre la posibilidad de apartarse de esos principios. Frente a este argumento se afirmó que, si bien las características peculiares de los medios electrónicos podían permitir que los documentos electrónicos se trataran de modo diferente a los documentos sobre papel, ese tratamiento debería formularse, aun así, en términos neutrales desde el punto de vista tecnológico.

### **C. Equivalencia funcional y neutralidad respecto de los medios tecnológicos**

29. El Grupo de Trabajo mantuvo un debate preliminar acerca de si los principios fundamentales existentes de comercio electrónico eran suficientes para facilitar el uso de documentos electrónicos transferibles o si era necesario formular otros principios.

### **D. Equivalencia funcional de la “singularidad”**

30. En relación con la práctica existente, se citó la Ley del Japón sobre reclamaciones monetarias registradas electrónicamente, de 2007, encaminada a facilitar nuevos métodos financieros mediante la introducción de los documentos electrónicos transferibles en sustitución de los pagarés o las letras sobre papel.

## E. Equivalencia funcional de la “posesión”: el concepto de “control”

31. Se hizo referencia al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, de 2009 (“las Reglas de Rotterdam”)<sup>7</sup>, en que el “derecho de control” se definía como el derecho a dar instrucciones al porteador respecto de las mercancías (artículo 1, párrafo 12). Se explicó que en las Reglas de Rotterdam el concepto del derecho de control era aplicable a los documentos negociables y no negociables, así como a los documentos electrónicos y de papel. Además, ese concepto hacía referencia a los procedimientos de emisión y transferencia de documentos y a la identificación del tenedor como única persona con derecho a la ejecución del documento.

32. Se estimó que la fiabilidad y la confianza eran factores primordiales que deberían tomarse en consideración en futuras deliberaciones sobre el control de los documentos electrónicos transferibles.

33. Se opinó que era preciso realizar un análisis a fondo de los distintos modelos y tecnologías para identificar a la persona que tenía el control del documento electrónico, a fin de comprender el modo en que el concepto de control podía trasladarse a los medios electrónicos. A este respecto se puso de relieve que el Grupo de Trabajo no debería limitar su labor a un modelo específico sino que debería adoptar un enfoque amplio que diera cabida a diversos modelos y a combinaciones de esos modelos.

34. Se mencionaron posibles problemas en la transposición a los medios electrónicos del concepto de un título negociable en beneficio del portador. Se dijo, por ejemplo, que un registro requeriría una inscripción, como el nombre de la persona que tenga derecho al título.

35. Además se sugirió que el Grupo de Trabajo examinara los problemas que planteaba la conversión de los documentos electrónicos transferibles en documentos de papel y viceversa.

36. En respuesta al comentario de que el concepto de control ya figuraba en el párrafo 3 del artículo 6 de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas, de 2001<sup>8</sup>, se observó que esa disposición era pertinente para la identificación del signatario, mientras que el concepto de control de un documento electrónico transferible tenía la finalidad de establecer un equivalente, en los medios electrónicos, de la posesión de un título negociable.

37. Se mencionó que el sistema Bolero (organización del registro electrónico de los conocimientos de embarque)<sup>9</sup> no permitía la utilización de títulos negociables, ya que se basaba en acuerdos contractuales. Se señaló además que ese sistema no preveía ningún mecanismo para proteger a los terceros, lo cual podría plantear dificultades cuando hubiera terceros que intervinieran en operaciones transfronterizas.

<sup>7</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.9 (tratado aún no en vigor).

<sup>8</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.02.V.8.

<sup>9</sup> El sistema Bolero se ha creado con arreglo al derecho inglés y se rige por su propio régimen de derecho privado (el Bolero Rulebook). Véase una descripción del sistema Bolero en los párrafos 75 a 86 del documento A/CN.9/WG.IV/WP.90.

## **F. El enfoque basado en un registro**

38. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre el enfoque basado en un registro como medio para lograr la equivalencia funcional de los documentos electrónicos transferibles. Se partió de la idea de que se hacía referencia a registros ya existentes, por ejemplo, al sistema de registro internacional creado en el marco del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, de 2001 (“el Convenio de Ciudad del Cabo”), al sistema Bolero y a los sistemas nacionales de registro. También se hizo referencia a la labor que actualmente realizaba el Grupo de Trabajo VI en materia de inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles (véase el párrafo 21 *supra*).

39. Si bien el Grupo de Trabajo reconoció en general la utilidad de los registros electrónicos, se sugirió que se procediera con cautela al estudiar este enfoque. En primer lugar, se señaló que los registros existentes fueron creados para satisfacer necesidades concretas; por ejemplo, los registros establecidos en virtud del Convenio de Ciudad del Cabo tenían la finalidad de tratar los bienes de gran movilidad y de notable valor. En segundo lugar, se observó que habría que examinar cuidadosamente los costos que entrañaría el establecimiento y la gestión de esos registros. En tercer lugar, se observó, a título de reserva, que la adopción del enfoque basado en un registro no debería ser un obstáculo para la vigencia del principio de la neutralidad respecto de los medios tecnológicos.

40. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que, si bien era preciso tener en cuenta los registros existentes que se mantenían a nivel nacional e internacional, no habría que considerar que el enfoque basado en un registro es el único enfoque apto para lograr la equivalencia funcional de los documentos electrónicos transferibles. Además, se subrayó que era esencial coordinar la labor en esta materia con la que llevaba a cabo el Grupo de Trabajo VI.

## **G. Posible metodología para la labor futura del Grupo de Trabajo**

41. Se observó que las listas de temas sugeridos para la labor futura (A/CN.9/WG.IV/WP.115, párrafo 69; y A/CN.9/WG.IV/WP.116, sección 4) ofrecían una base útil para iniciar la labor de determinación de los temas pertinentes.

42. Se estimó que sería conveniente deliberar sobre la responsabilidad de los terceros de confianza y de otros prestadores de servicios y, por tanto, no únicamente de los administradores de registros. Se respondió que en anteriores tentativas de abordar las cuestiones de responsabilidad en el Grupo de Trabajo había quedado de manifiesto la existencia de distintos enfoques en los diversos ordenamientos jurídicos.

43. Se convino en general en que aún era pronto para determinar la forma que debería revestir la futura labor. Se sugirió que esa labor abarcara varios instrumentos. Se comentó además que, a medida que avanzaran los trabajos, sería posible hacer aclaraciones sobre este punto.

44. A este respecto se dijo que el Grupo de Trabajo debería tratar de redactar textos directamente relacionados con las necesidades que se experimentaban en las comunicaciones electrónicas y que no afectaran a las disposiciones legales ya

existentes. Se agregó que era necesario asegurar que esos textos fueran acordes con el mandato de la CNUDMI y contribuyeran eficazmente al desarrollo del comercio internacional. Por consiguiente, deberían abordar cuestiones relacionadas con el reconocimiento transfronterizo de los documentos electrónicos transferibles.

45. Algunas delegaciones opinaron que tal vez no era necesario entablar una labor en materia de comercio electrónico, habida cuenta de que los documentos electrónicos transferibles no planteaban problemas concretos. En cambio, otras delegaciones consideraron que tal labor aportaría beneficios prácticos y económicos a personas que de otro modo no recurrirían a los documentos electrónicos transferibles. Las consultas mantenidas por los Estados con partes interesadas de sus respectivos países no habían puesto en evidencia ninguna situación que causara problemas respecto de los documentos electrónicos transferibles y se sugirió que, dado que el empleo de documentos electrónicos transferibles no tropezaba con ningún obstáculo jurídico, el Grupo de Trabajo emprendiera otra tarea, como la de establecer normas que rijan la gestión de la identidad.

46. Frente a la observación de que no se tenía conocimiento de ningún obstáculo jurídico para la utilización de documentos electrónicos transferibles, se señaló que la adopción de legislación que permitiera utilizar documentos electrónicos transferibles generaba confianza en los usuarios acerca de la condición jurídica de esos documentos y se promovía así su utilización. Se agregó que, en determinados ordenamientos jurídicos, los títulos negociables solamente podrían utilizarse cuando la legislación lo permitiera, y que la falta de disposiciones legislativas al respecto impedía que se desarrollara una práctica.

47. Se observó que si bien había ejemplos de legislaciones que regían los documentos electrónicos transferibles y que parecían indicar que convenía legislar al respecto, y que, además, algunas leyes habían resultado eficaces, podría haber obstáculos jurídicos para el empleo de documentos electrónicos transferibles en un contexto transfronterizo, por ejemplo, en la utilización de conocimientos de embarque electrónicos. Frente a esos obstáculos tal vez convendría que el Grupo de Trabajo adoptara reglas armonizadas que atendieran a las necesidades del sector.

48. Se sugirió que sería útil hacer una recopilación de las prácticas seguidas en los diversos ordenamientos jurídicos y sectores comerciales, a fin de determinar los factores jurídicos que obstaculizaban la utilización de documentos electrónicos transferibles. A este respecto se mencionó que para el Grupo de Trabajo sería beneficioso que se le presentaran ejemplos concretos de los distintos ordenamientos, así como una lista de los obstáculos jurídicos que se hubieran observado, en particular, en el ámbito del comercio internacional.

49. Por otra parte, se sugirió que el Grupo de Trabajo empezara examinando los principios generales de derecho que regían los documentos electrónicos transferibles. Se explicó que ese enfoque permitiría realizar un examen completo de las repercusiones que tendrían futuras decisiones en unas reglas más detalladas.

50. Se consideró además que sería útil definir los conceptos de “documento electrónico transferible” y “documento electrónico negociable”, a fin de determinar el alcance de la labor del Grupo de Trabajo.

51. A este respecto se explicó que en los sistemas de *commow law* los títulos negociables se consideraban un subgrupo de los documentos transferibles, con la

particularidad de que la negociación del título tenía lugar sin remitir a la operación pertinente. Se agregó que el tenedor, en un momento dado, de un título negociable podía obtener un mejor derecho a cobrar una suma de dinero o a la entrega de mercancías que el autor de la transferencia, siempre que se cumplieran otros requisitos.

52. Se mencionó que los documentos electrónicos transferibles se habían excluido del ámbito de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico y que, por consiguiente, deberían tratarse en el marco de la labor futura.

53. Se explicó además que en los ordenamientos de derecho civil los regímenes de los títulos negociables eran similares a los de los ordenamientos de *common law*. Se señaló que esos títulos eran emitidos en beneficio del tenedor y se transferían mediante endoso y entrega y, cuando eran títulos al portador, mediante la simple entrega. Por consiguiente, la posesión del documento era el elemento primordial en su negociación.

54. En cuanto al alcance de la labor del Grupo de Trabajo, se sugirió que sería útil recurrir, como punto de partida, a la lista de documentos que figuraba en el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005 (“la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”)<sup>10</sup>. Se recordó que esos documentos estaban excluidos del ámbito de aplicación de la Convención debido a la dificultad que entrañaba dar a los documentos electrónicos una negociabilidad equivalente a la de los documentos sobre papel y, en particular, porque era difícil asegurar la singularidad de esos documentos. Se agregó que un elemento común de esos documentos era la posibilidad de transferir derechos junto con el documento. Se hizo también referencia a los artículos 9 y 10 de las Reglas de Rotterdam, por considerarse pertinentes.

55. Una delegación sugirió que se determinaran los requisitos jurídicos comunes y mínimos para la negociabilidad y los factores jurídicos que obstaculizaban su transposición a los medios electrónicos. Por otra parte, se consideró que, antes de entablar un debate sobre el alcance de la labor del Grupo de Trabajo, habría que determinar los obstáculos jurídicos que impedían la utilización de los documentos electrónicos transferibles, así como las necesidades reales que tenía el sector industrial en relación con el uso de esos documentos.

56. Se puso de relieve que el reconocimiento transfronterizo era un objetivo implícito de todas las cuestiones relacionadas con los documentos electrónicos transferibles. Se mencionó también la posibilidad de aclarar la relación entre los documentos electrónicos transferibles, por un lado, y el dinero electrónico y los pagos electrónicos, por otro.

57. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre la creación de los documentos electrónicos transferibles. Se aclaró que lo que se trataba de examinar no era el modo de creación de los derechos incorporados a los documentos electrónicos transferibles, ya que esa cuestión se regía por el derecho sustantivo, sino la forma que debía revestir un documento electrónico transferible para que pudiera cumplir el objetivo de la equivalencia funcional con un documento transferible impreso.

<sup>10</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.07.V.2 (tratado aún no en vigor).

58. Se convino en general en que en los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico ya se enunciaban principios para establecer la equivalencia funcional entre “escrito” y “firma” que podían ser pertinentes para la creación de documentos electrónicos transferibles, a reserva de las adaptaciones que debieran hacerse en función de las correspondientes necesidades.

59. Se estimó que también habría que estudiar la cuestión de la parte que tenía derecho a emitir un documento electrónico transferible o a solicitar su emisión, en particular en el marco del enfoque basado en un registro. En ese contexto, se hicieron referencias al artículo 35 de las Reglas de Rotterdam y a las disposiciones pertinentes de la ley coreana que rige la emisión de conocimientos de embarque electrónicos (A/CN.9/692, párrs. 30 a 32).

60. Se explicó que, en el contexto de los documentos electrónicos transferibles, la firma podía desempeñar por lo menos dos funciones: en primer lugar, la identificación de la parte y la vinculación de esa parte con el contenido del documento y, en segundo lugar, el mantenimiento de la integridad del contenido del documento, si la tecnología lo permitía. No obstante, se agregó que esa segunda función podía cumplirse también de otro modo; por ejemplo, en un sistema registral, el propio sistema podía garantizar la integridad del documento.

61. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la transferencia y la ejecución de derechos consignados en documentos electrónicos transferibles. Se señaló que la transferencia y la legitimación para el ejercicio de los derechos guardaban una estrecha relación.

62. Se explicó que cabía utilizar distintos modelos para la transferencia de esos documentos y de los derechos en ellos consignados, como el modelo de registro y el modelo de símbolo (*token*). Se dijo además que entre las características técnicas de esos modelos podía haber notables diferencias, por ejemplo, con respecto al tipo de firma electrónica y al correspondiente nivel de seguridad.

63. Se indicó que los títulos negociables y los documentos de titularidad tenían un rasgo distintivo que radicaba en la protección que otorgaban a los terceros. Se agregó que esa función solamente podía existir a raíz de disposiciones legislativas, dado que los acuerdos contractuales no podían afectar a los terceros. Además se comentó que, en determinados ordenamientos jurídicos, la emisión de esos títulos y documentos se supeditaba a la existencia de una disposición legal explícita.

64. Se puso de relieve que, dado que la entrega era necesaria para la transferencia de la posesión de títulos negociables y de documentos de titularidad, así como de los derechos en ellos consignados, la definición de un equivalente funcional del concepto de posesión permitiría transferir eficazmente documentos electrónicos transferibles y los derechos incorporados a ellos.

65. Se observó que los mecanismos previsibles para la transferencia de documentos electrónicos transferibles eran notablemente distintos de los mecanismos existentes para los documentos de papel transferibles. Por consiguiente, se sugirió que se formularan normas jurídicas que permitieran utilizar documentos electrónicos transferibles y que, con tal fin, en esas normas se definieran los requisitos generales para la equivalencia funcional de la posesión, requisitos que se cumplirían mediante la tecnología. Se explicó además que, una vez logrado el equivalente funcional de la posesión, habría efectos como la negociabilidad que se

derivarían del derecho sustantivo aplicable a los documentos transferibles, tanto a los electrónicos como a los de papel.

66. Con respecto a la singularidad se dijo que en el equivalente funcional de la posesión debería determinarse la identidad del único tenedor con derecho a ejecución y debería excluirse a todas las personas que no fueran el tenedor del derecho a exigir la ejecución.

67. Se observó también que los requisitos para la presentación del documento electrónico transferible merecían un cuidadoso análisis, dado que la presentación podría requerir la cooperación adicional del receptor.

68. Se indicó que para identificar de manera fiable al tenedor era importante no solamente permitir el ejercicio del derecho de control sino también verificar la validez de la cadena de transferencias del documento.

69. En cuanto a la identificación del tenedor, se explicó que había dos enfoques. Según el primer enfoque, la ley remitía totalmente al acuerdo entre las partes de determinar el grado suficiente de identificación. Conforme al segundo enfoque, la ley enumeraba los requisitos sobre el grado necesario de identificación. Se sugirió que se estudiara el segundo enfoque teniendo presente el principio de la neutralidad respecto de los medios tecnológicos. En este contexto se hizo referencia a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas como posible base para la preparación de futuros textos.

70. En el mismo orden de ideas, se hizo referencia al párrafo 3) del artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 1996 (“la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico”)<sup>11</sup> como posible fuente de inspiración para formular normas sobre el carácter original y la integridad del documento electrónico transferible.

71. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre los registros para documentos electrónicos transferibles. Se explicó que, en algunos casos, la ley prescribía el establecimiento de registros, cuya administración podía correr a cargo de entidades públicas o privadas, mientras que, en otros casos, la demanda de la industria promovía la creación de registros privados de acuerdo con los requisitos jurídicos mínimos y bajo supervisión gubernamental.

72. Se formuló la pregunta de si los registros para documentos electrónicos transferibles funcionarían a nivel nacional o internacional. Se señaló que los registros internacionales requerirían mecanismos suplementarios para asegurar la transparencia y la neutralidad en su funcionamiento, y que debería asegurarse la coordinación y la interacción y compatibilidad entre los registros nacionales e internacionales a fin de preservar la certeza jurídica.

73. Se preguntó también si los registros para documentos electrónicos transferibles se concebirían para ser aplicables a determinados tipos de documentos electrónicos transferibles o si los englobarían a todos. A este respecto, se observó que los registros que se centraban en un determinado documento o sector industrial no planteaban problemas específicos de conocimiento por parte de los usuarios, ya que esos registros requerían la participación del usuario, o eran de particular interés para

---

<sup>11</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.99.V.4.

el sector comercial pertinente. Por otra parte, los registros concebidos para una mayor diversidad de documentos electrónicos transferibles podían requerir medidas adicionales para darlos a conocer mejor entre los usuarios.

74. Se indicó que el diseño y el funcionamiento de los registros dependería de una serie de elementos, inclusive del tipo de documento electrónico transferible, de la tecnología adoptada para el registro, del sector comercial y de la demanda del mercado. Se formuló la pregunta de si un sistema registral que adoptara una tecnología concreta podría dar cabida a todos los tipos de documentos electrónicos transferibles y funcionar en países que dispusieran de distintos niveles de tecnología informática y de las comunicaciones.

75. En vista de lo anterior, se sugirió que el Grupo de Trabajo se centrara en la determinación de los requisitos para el establecimiento de registros y en las posibles modalidades para la transferencia de documentos electrónicos transferibles en esos registros.

76. Se informó al Grupo de Trabajo de la labor del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales), que preparaba un texto sobre la inscripción registral de garantías reales sobre bienes muebles. Se recordó en primer lugar que ya se había procurado que la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (“la Guía sobre las Operaciones Garantizadas”)<sup>12</sup> se ajustara a los principios fundamentales de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico. Esa coordinación dio lugar a las recomendaciones 11 y 12 de la mencionada Guía.

77. Se explicó además que la finalidad de la labor actual era formular directrices para establecer y administrar un registro de garantías reales basado en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y, en particular, en su capítulo IV. Dado que el registro que se preveía sería, en la medida posible, un registro electrónico, durante el 18º período de sesiones del Grupo de Trabajo VI se había deliberado sobre el modo de asegurar que el registro estuviera en consonancia con los principios fundamentales de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico (A/CN.9/714, párrs. 34 a 47).

78. Se observó que un registro de las garantías reales como el que se preveía en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas se diferenciaba de varios modos de un registro de documentos de titularidad. En primer lugar, el registro de garantías reales se basaba en la inscripción de notificaciones, y no de documentos. En segundo lugar, la finalidad de la inscripción no era constituir una garantía real sino más bien hacerla oponible a terceros. Así pues, la notificación era un simple dato de referencia para los terceros en que se les informaba de la posible existencia de una garantía real. En tercer lugar, el registro de garantías reales estaba en función de los otorgantes y no de los bienes gravados. Por último, en el proceso de inscripción registral de notificaciones no se requería ninguna autorización formal. Consciente de esas distinciones, el Grupo de Trabajo convino en general que un registro de garantías reales era notablemente diferente de un registro de documentos de titularidad.

79. Se observó además que en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y en el texto que se preparaba figuraban secciones sobre la coordinación de registros,

<sup>12</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.12.

inclusive acerca de la posible coordinación entre un registro de titularidad y un registro de garantías reales, lo cual podía ser útil en futuras deliberaciones del Grupo de Trabajo IV.

80. El Grupo de Trabajo entabló un debate acerca de si el emisor debía seguir interviniendo en la transferencia o negociación de un documento electrónico transferible y, de ser así, en qué medida. Se explicó que la emisión de un documento electrónico transferible suponía un acuerdo entre el emisor y el primer tenedor acerca de la tecnología que iba a emplearse. Se insistió en la necesidad de asegurar que ese documento pudiera circular ulteriormente sin la intervención del emisor. Se señaló también que, desde el punto de vista tecnológico, la participación del emisor durante el período útil del documento electrónico transferible dependía del tipo de tecnología que se utilizara.

81. El Grupo de Trabajo pasó a examinar los efectos que tenían, para la protección de los terceros que actuaran de buena fe, los diversos modos de transferencia de derechos en documentos electrónicos transferibles. Sobre esta cuestión se sostuvo que la protección de los terceros se derivaba del derecho sustantivo. Se puso de relieve que, tanto en los documentos electrónicos transferibles como en los documentos de papel transferibles, debería garantizarse a los terceros el mismo nivel de protección.

82. No obstante, se observó que los distintos sistemas aplicables a los documentos electrónicos transferibles podían ofrecer diferentes niveles de protección a los terceros. Se agregó, en particular, que si bien existían varios ejemplos de sistemas basados en un registro que daban una protección suficiente a los terceros, el Grupo de Trabajo no disponía de tanta información respecto de los sistemas de símbolo (*token*). Se indicó además que, si bien en la práctica determinados sistemas podían ofrecer a los terceros un grado de protección inferior, era conveniente permitir un margen de flexibilidad para que se elaboraran soluciones acordes con las necesidades comerciales existentes.

83. Hubo acuerdo general en que las cuestiones relativas a la responsabilidad de los terceros que intervinieran en la transferencia o en el almacenamiento de documentos electrónicos transferibles, o en la identificación de las partes en esos documentos, eran de interés y que, por lo tanto, deberían mantenerse en el programa de futuras deliberaciones. Sin embargo, una delegación opinó, en cambio, que esas cuestiones no se limitaban a los documentos electrónicos transferibles.

84. El Grupo de Trabajo pasó a examinar el tema de la conversión de los documentos electrónicos transferibles en documentos de papel, y viceversa. Se puso de relieve la importancia que tenía esa cuestión para la aceptación de los documentos electrónicos transferibles en las prácticas comerciales, habida cuenta de los distintos niveles de desarrollo tecnológico que había entre los países y entre las partes comerciales.

85. A modo de referencia útil para la labor futura en esta materia se mencionó la “Ley por la que se establece un marco jurídico para la tecnología de la información”, de Quebec, provincia del Canadá (L.R.Q., capítulo C-1.1). Se explicó que, en esa ley, el concepto de documento se definía en términos neutrales desde el punto de vista tecnológico, y que ese enfoque permitía convertir en cualquier momento un documento de papel en un documento electrónico, y viceversa, sin que ello alterara la condición jurídica del contenido del documento, siempre y cuando el

procedimiento de conversión estuviera documentado con miras a asegurar la integridad de la información consignada en el documento (artículo 17). Se agregó que el párrafo 5) del artículo 17 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico podía también dar una orientación útil acerca de ese cambio de formato de los documentos.

86. Se indicó que, en los Estados Unidos de América, si había que convertir un documento de papel transferible en documento electrónico, había que presentarlo al emisor y que, inversamente, si había que convertir un documento electrónico transferible en un documento de papel, había que ceder el control sobre él. Además, en el documento resultante había que especificar la conversión que se había efectuado. Se explicó que el objetivo de ese procedimiento, que era similar al que preveía el artículo 10 de las Reglas de Rotterdam, era asegurar que circulara un único documento transferible. También se hizo referencia a la Check Clearing for the 21st Century Act, ley que permitía crear una versión electrónica del cheque sobre papel.

87. Se expusieron disposiciones similares de la legislación de la República de Corea que, en caso de conversión de un conocimiento de embarque electrónico, requerían la anotación de los endosos anteriores en el reverso del conocimiento de embarque sobre papel (véase también A/CN.9/692, párr. 37). A este respecto se formuló la pregunta de si la conversión de un documento requeriría un acuerdo entre el emisor y el tenedor o si, al menos en algunas circunstancias, bastaría con la solicitud de una de las partes.

88. Respecto de la conversión de documentos no transferibles en formato electrónico y en soporte de papel se mencionaron distintas prácticas. Se explicó que en Italia la conversión de un documento de papel en documento electrónico debía correr a cargo de un tercero de confianza (un notario de la administración pública) a fin de mantener la validez jurídica del documento, mientras que en el Paraguay los documentos electrónicos podían mantener su validez jurídica cuando se imprimieran sobre papel siempre que se especificaran un número de identificación y un código de barras. En otros Estados se comunicó que había resistencia a que se destruyeran los documentos de papel transformados en documentos electrónicos.

## **V. Labor de otras organizaciones internacionales sobre cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos electrónicos transferibles**

89. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la labor que realizaban otras organizaciones sobre cuestiones jurídicas relativas al comercio electrónico y, en particular, el proyecto de recomendación 37 sobre la interoperabilidad de las pruebas digitales firmadas, del Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT) (el “proyecto de recomendación”). Se indicó que algunos Estados, así como la secretaría de la CNUDMI, habían respondido a la invitación a presentar observaciones sobre el proyecto de recomendación a su equipo de proyectos en el marco del proceso abierto de desarrollo.

90. Se plantearon varias cuestiones enunciadas en el proyecto de recomendación. En primer lugar, el enfoque general adoptado en el proyecto de recomendación parecía ir en contra de los principios fundamentales de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico, en particular, contra el principio de la neutralidad respecto de los medios tecnológicos, al favorecer un determinado tipo de firma electrónica. En segundo lugar, el proyecto de recomendación no parecía dar a las partes la flexibilidad necesaria para convenir la tecnología más apropiada para sus necesidades. Por último, ciertos términos empleados en el proyecto de recomendación, como las “pruebas”, tenían repercusiones jurídicas, a pesar de que en el proyecto de recomendación se declaraba, como justificación, lo contrario.

91. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento al Centro (UN/CEFACT) por la labor realizada para facilitar el comercio y armonizar las prácticas comerciales. El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito que se le remitiera el proyecto de recomendación del Centro, habida cuenta de las complementariedades que existían entre la labor de ambas entidades. Asimismo, el Grupo de Trabajo expresó el deseo de que en el futuro se mantuviera la cooperación con el Centro, inclusive mediante su participación en futuras deliberaciones del Grupo de Trabajo, con miras, en particular, a aclarar el texto y las opciones enunciadas en el proyecto de recomendación. Se convino en examinar con más detalle el proyecto de recomendación en futuros períodos de sesiones.

## **VI. Otros asuntos**

### **A. Asistencia y cooperación técnicas**

92. En el marco de la estrategia de cooperación técnica respaldada por la Comisión en su 44º período de sesiones (A/66/17, párrs. 254, 255 y 257), se expusieron ante el Grupo de Trabajo datos actualizados sobre las actividades de cooperación técnica en el ámbito del comercio electrónico. Concretamente, se explicaron las iniciativas adoptadas a nivel regional para promover la adopción de textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico, así como las consiguientes medidas legislativas adoptadas en los países. También se puso de relieve la conveniencia de fomentar una adopción más amplia por los Estados de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas. El Grupo de Trabajo expresó a la Secretaría su reconocimiento por la labor realizada en el ámbito de la cooperación técnica y puso de relieve la importancia que tenía esa labor en la promoción del cumplimiento del mandato de la CNUDMI.

### **B. Futuras reuniones**

93. El Grupo de Trabajo entabló un debate preliminar sobre su futura labor. En general, se convino en que las deliberaciones del siguiente período de sesiones se beneficiarían de la preparación de documentos de trabajo que abarcaran y abordaran las siguientes cuestiones que se habían determinado en el actual período de sesiones y en los que se recopilara información acerca de la legislación pertinente adoptada en diversos Estados y las prácticas seguidas en diversos sectores comerciales.

94. En este contexto, se reconoció que las fechas asignadas para el siguiente período de sesiones del Grupo de Trabajo (del 13 al 17 de febrero de 2012 en Nueva York, o bien del 9 al 13 de enero de 2012 en Viena) tal vez no dieran tiempo suficiente a los Estados Miembros para consultar al sector y a la Secretaría para recopilar la información necesaria para preparar los documentos de trabajo requeridos.

95. En primer lugar, se pidió a la Secretaría que investigara la posibilidad de celebrar el siguiente período de sesiones en fechas posteriores, como en primavera de 2012, a fin de disponer de más tiempo para preparar la reunión. Se sugirió también que, al tiempo que se mantuviera la opción de celebrar ese período de sesiones en fechas posteriores de primavera de 2012, se estudiaran diversas formas de celebrar consultas amplias, como reuniones de expertos, videoconferencias o seminarios regionales, a fin de ayudar a la Secretaría a preparar los documentos de trabajo y a mantener un canal de comunicación entre los Estados Miembros y el Grupo de Trabajo. Se instó también a los Estados Miembros a que facilitaran lo antes posible información pertinente a la Secretaría para preparar los documentos de trabajo. En esas circunstancias, se pidió a la Secretaría que se planteara también la posibilidad de convocar el siguiente período de sesiones, previa aprobación de la Comisión, en otoño de 2012, en función de cómo fueran avanzando los preparativos de esa reunión.

---